

CUANDO VIVIMOS MÁS Y NACEN MENOS: EL VERDADERO DESAFÍO DE LA SALUD DEL SIGLO XXI

Señora directora:

Chile enfrenta un cambio demográfico profundo, marcado por la disminución de la natalidad y el envejecimiento acelerado de la población, cuyas implicancias económicas y sociales aún no están plenamente dimensionadas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la Tasa Global de Fecundidad cayó a 1,06 hijos por mujer y, a partir de 2027-2028, el país comenzará a registrar más muertes que nacimientos. Este escenario exige incorporar una mirada sanitaria de largo plazo en el debate público.

El envejecimiento poblacional no solo tensiona el mercado laboral y los sistemas de pensiones; impacta directamente la sostenibilidad del sistema de salud. Una parte significativa del gasto sanitario se concentra en los últimos años de vida, cuando aumentan las enfermedades crónicas, la dependencia y los tratamientos de alto costo. A ello se suma la postergación de la maternidad, un avance incuestionable en derechos, educación y autonomía de las mujeres, pero cuyos efectos agregados sobre la demografía y los sistemas de protección social también deben ser abordados con realismo y responsabilidad colectiva.

Estamos frente a una misma ecuación:

más longevidad y menos nacimientos. Este escenario redefine el equilibrio entre quienes aportan al sistema y quienes requieren mayores cuidados, y obliga a repensar el modelo sanitario, avanzando desde uno reactivo hacia uno centrado en la prevención, el acompañamiento y la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida.

Claudia Paredes

Gerente general de Isapre Esencial

LICENCIAS MÉDICAS Y CRISIS DE CONFIANZA

Señora directora:

La lentitud en los procesos sumariales por el mal uso de licencias médicas no es solo un problema administrativo; es un síntoma de una erosión ética profunda en nuestro Estado. Esta inacción, impulsada por la negligencia de autoridades poco dispuestas a enfrentar trámites complejos y una evidente falta de competencias técnicas en los fiscalizadores, tiene un costo que trasciende lo económico.

Cuando el Estado permite que se malgasten recursos públicos sin consecuencias, no solo pierde dinero —que, dada su ineficiencia en la recuperación de fondos, probablemente sea irrecuperable—, sino que pone en jaque la legitimidad de sus instituciones.